

**DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CATALUÑA**

**(SEGUNDO SEMESTRE 2018)**

—

**DRET I POLÍTQUES AMBIENTALS A CATALUNYA**

**(SEGON SEMESTRE 2018)**

**MARÍA INÉS GIL CASIÓN**

*Profesora asociada de Derecho Administrativo*

*Universitat Rovira i Virgili*

**Sumario:** 1. Introducción. 2. Conflictividad competencial en materia ambiental. Recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencias resueltos en este segundo semestre. 3. El Decreto 139/2018, de 3 de julio, sobre los regímenes de intervención ambiental atmosférica de los establecimientos donde se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. 4. Modificaciones en la delimitación de diversos espacios naturales protegidos y en el mapa de protección contra la contaminación lumínica. 5. La estrategia marítima de Cataluña. 6. Programas de prevención y gestión de residuos y recursos de Cataluña. 7. Otras normas y actuaciones de interés en materia ambiental

## 1. INTRODUCCIÓN

En el periodo examinado (del 31 de marzo de 2018 al 31 de octubre de 2018), no son demasiadas las novedades normativas en materia ambiental que se han producido en Cataluña. Como ya se indicó en la crónica anterior, ello no debe extrañar si tenemos en cuenta la coyuntura política que se vive en esta Comunidad Autónoma. Después del 1 de octubre y del largo periodo en el que estuvieron en vigor las medidas autorizadas por el Senado en aplicación del artículo 155 de la Constitución, no ha sido hasta el mes de junio de 2018, que se han formado nuevos gobiernos de la Generalitat y del Estado. En estas circunstancias, con un nuevo Parlamento catalán constituido el 16 de enero, pero con la constitución de un nuevo Gobierno catalán, demorada hasta el 2 de junio de 2018, la actuación normativa en materia ambiental ha sido muy limitada.

En este contexto, en el ámbito parlamentario y en relación a la normativa ambiental catalana, destacar el Proyecto de Ley de ordenación del litoral, aprobado por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat el 23 de octubre, que pretende articular un modelo de gestión integrada del espacio costero, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, que empezará su tramitación parlamentaria. El Gobierno ya aprobó el proyecto en octubre de 2017, de lo que se hizo referencia en una crónica anterior, pero la finalización de la legislatura impidió que se iniciara la discusión parlamentaria en aquel momento.

También resulta de interés destacar dos proposiciones de ley en materia ambiental que están actualmente en trámite. La primera de ellas es la proposición de ley de espacios agrarios<sup>1</sup>, que tiene como objetivo ordenar la

---

<sup>1</sup> Legislatura XII. Núm. expediente 202-00026/12 (Tramitación por procedimiento de urgencia).

gestión de los espacios agrarios en Cataluña y diseñar los mecanismos necesarios para dar seguridad jurídica a los titulares de las explotaciones agrarias. En segundo lugar, destacar la proposición de ley de protección de olivos monumentales<sup>2</sup>, que tiene por objetivo detener y evitar la degradación y desaparición de este patrimonio, estableciendo mecanismos e instrumentos de planificación que aseguren su adecuada gestión y su permanencia en el lugar que les ha visto enraizarse, prohibiendo de manera explícita su extracción, trasplante y comercialización.

Sí que resulta sin embargo subrayable, la conflictividad competencial que ponen de manifiesto los numerosos procesos pendientes de resolución del Tribunal Constitucional, ya sean recursos de inconstitucionalidad o conflictos de competencia, alguno de los cuales afectan materias ambientales y se han resuelto en este período.

Ya en otro plano, en el ámbito reglamentario, destaca el Decreto 139/2018, de 3 de julio, sobre los regímenes de intervención ambiental atmosférica donde se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera de Cataluña.

Finalmente, se implementan instrumentos de planificación y política ambiental, entre los que cabe destacar los acuerdos de aprobación de la estrategia marítima de Cataluña y los programas de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña.

## **2. CONFLICTIVIDAD COMPETENCIAL EN MATERIA AMBIENTAL. RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CONFLICTOS DE COMPETENCIAS RESUELTOS EN ESTE SEGUNDO SEMESTRE**

Como se indicaba en la introducción a esta crónica, son numerosos los procesos pendientes de resolución del Tribunal Constitucional, ya sean recursos de inconstitucionalidad o conflictos de competencia, alguno de los cuales afectan materias ambientales y se han resuelto en este período. Así, en el mes de junio de 2018, tras la formación del nuevo Gobierno de Cataluña, el

---

<sup>2</sup> Legislatura XII. Núm. expediente 202-00023/12 (Tramitación por procedimiento de ordinario).

Pleno del Tribunal Constitucional decidió, por unanimidad, dictar varias providencias en las que se acuerda dar traslado a la Generalitat de Cataluña, para formular las alegaciones oportunas en los numerosos recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno de España contra leyes catalanas. Su tramitación estaba suspendida por la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Los magistrados consideran que, tras la formación del nuevo Gobierno de Cataluña, se ha producido la pérdida de vigencia del Real Decreto 944/2017, de 27 de octubre, por el que se designaba a órganos y autoridades encargados de dar cumplimiento a las medidas dirigidas al Gobierno y a la Administración de la Generalitat de Cataluña, al amparo del artículo 155 de la Constitución.

En concreto, en materia ambiental, cabe recordar que está en trámite el recurso de inconstitucionalidad planteado contra la Ley catalana 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono. El Estado impugnó entre otros, los preceptos por los que se había creado el impuesto sobre el riesgo ambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos, al considerar que contradicen los apartados 2 y 3 del artículo 6 de la LOFCA, por la coincidencia con los hechos imposables del impuesto estatal sobre producción de combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nuclear eléctrica, regulado en la Ley estatal 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, así como también por el posible solapamiento con el impuesto de actividades económicas.

Asimismo, al plantear el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Cataluña 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático, el Estado impugnó los preceptos por los que se creó el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, al considerar que se producía la coincidencia de hechos imposables prohibida por el artículo 6.2 y .3, de la LOFCA, respecto del impuesto sobre determinados medios de transporte,

regulado en la Ley estatal 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y con el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, regulado en la Ley de haciendas locales. Esta misma Ley catalana 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático, fue impugnada también en muchos otros de sus preceptos, por supuesta vulneración de las competencias en materia de medio ambiente, como, por ejemplo, las previsiones relativas a los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el marco estratégico de referencia de la mitigación, los presupuestos del carbono y el inventario de emisiones a la atmósfera y de sumideros de CO<sup>2</sup> en Cataluña, las medidas dirigidas a la adaptación al cambio climático como el marco estratégico de referencia de adaptación, los instrumentos de planificación y programación, así como otras medidas sectoriales, como la interconexión de redes de abastecimiento de agua, las medidas dirigidas a la transición hacia un modelo energético renovable, desnuclearizado, descarbonizado, libre de actividades prospectivas y de explotación por fracking, la declaración del Mediterráneo como zona libre de prospecciones y de extracción de hidrocarburos, la promoción de un sector de la automoción que no sea de combustión interna fósil, la creación de un fondo climático, la actuación respecto del comercio de derechos de emisión, y la sujeción de los edificios nuevos y los sometidos a grandes rehabilitaciones al cumplimiento de los requisitos correspondientes a un edificio de consumo de energía casi nulo. En el recurso, el Estado consideró que se invaden las competencias reservadas al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, en materia de hacienda, en materia de legislación básica de medio ambiente y en materia de las bases del régimen minero y energético (arts. 149.1.13, .14, .25 y .23 CE), así como otros ámbitos sectoriales afectados por las medidas específicas.

A su vez, el Gobierno de la Generalidad de Cataluña planteó un conflicto de competencias frente del Gobierno del Estado en relación con determinados preceptos del Real Decreto 264/2017, de 17 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la financiación de la adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos establecidos en el Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas

eléctricas de alta tensión. La norma estableció las bases reguladoras de las ayudas a los titulares de las líneas eléctricas, previa convocatoria que deberá hacer cada año el secretario de estado de Medio Ambiente, encomendó la gestión y concesión centralizada de las ayudas al Ministerio de Agricultura y Pesca, alimentación y medio ambiente, e invocó las competencias del Estado en materia de legislación básica sobre protección del medio ambiente y de bases del régimen minero y energético (arts. 149.1.23 y .25 CE). Pero el Real Decreto no tuvo en cuenta que la Generalitat ha asumido tanto la competencia compartida en materia de medio ambiente, como una competencia de carácter exclusivo en materia de espacios naturales, así como la gestión de los espacios naturales situados en Cataluña en régimen de protección estatal (art. 144 EAC). Además, en cuanto a la concesión de subvenciones, la Generalitat ha asumido la competencia prevista en el artículo 114 del EAC, y el TC ha establecido una reiterada doctrina en la que ha reconocido la necesaria gestión descentralizada por las CCAA de las subvenciones estatales en las materias en las que las competencias ejecutivas corresponden a las comunidades autónomas.

Este conflicto de competencias, se ha resuelto mediante Sentencia 88/2018, de 19 de julio de 2018. En su fallo, el alto tribunal estima parcialmente el conflicto de competencias interpuesto por la Generalitat y declara contrarios al orden constitucional los preceptos del Real Decreto, que hacen referencia al Secretario de Estado de Medio Ambiente o al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente como responsables de la convocatoria de ayudas para la protección de aves de las líneas eléctricas. “Se trata de funciones de naturaleza ejecutiva que contravienen el orden constitucional de distribución de competencias”, señala el TC, que entiende que los preceptos en cuestión vulneran las competencias de la Generalitat.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha dictado Sentencia 69/2018, de 21 de junio de 2018, por la que resuelve el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra varios preceptos de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. El Tribunal Constitucional resuelve que “no es posible apreciar el desapoderamiento

competencial denunciado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en cuanto a la «gestión» del fondo nacional de eficiencia energética». Distinta conclusión alcanza la Sala respecto a la gestión de los certificados de ahorro energético, que también se encomienda al Estado a través del IDAE. La Sala entiende esta gestión como una actividad vinculada a su reconocimiento y concesión, por tanto, una “actividad ejecutiva reglada en alto grado”, que, en este caso, tratándose de la materia “energía”, las CCAA tienen reservadas las competencias de gestión y ejecución. Por tanto, en este supuesto, el Estado no tiene reservadas las potestades de ejecución y aplicación de las normas.

También ha resuelto el Tribunal Constitucional, en Sentencia 64/2018 de 7 de junio de 2018, el conflicto positivo de competencia interpuesto por la Generalitat de Cataluña en relación con los artículos 6, 7.1, 2, 4, 5 y 6; 9.1; 11.2 y el anexo II del Real Decreto 1007/2015, de 6 de noviembre, por el que se regula la adquisición por el fondo de carbono para una economía sostenible, de créditos de carbono del plan de impulso al medio ambiente en el sector de la empresa «PIMA Empresa» para la reducción de gases de efecto invernadero en sus instalaciones. En este caso el Tribunal Constitucional analiza si en el marco del artículo 149.1.23 de la Constitución, el Estado puede asumir las funciones ejecutivas que establece el RD 1007/2015 en relación con la tramitación de solicitudes, valoración y adquisición de créditos de carbono, y entiende que no concurre la excepcionalidad que lo justificaría, de tal forma que estima parcialmente el conflicto. El mismo argumento concurre en la Sentencia 62/2018 del Pleno del Tribunal Constitucional, de 7 de junio de 2018 que resuelve el conflicto positivo de competencia interpuesto por la Generalitat de Cataluña en relación con los artículos 2.1; 5.1, 3, 4, 5 y 6; 6; 7.2 y 3; 8.1 y 10 del Real Decreto 635/2013, de 2 de agosto, por el que se regula la adquisición de créditos futuros de carbono por el fondo de carbono para una economía sostenible, en desarrollo del “Plan de Impulso al Medio Ambiente en el sector hotelero PIMA Sol” para la rehabilitación energética de sus instalaciones.

### **3. EL DECRETO 139/2018, DE 3 DE JULIO, SOBRE LOS REGÍMENES DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL ATMOSFÉRICA DE LOS**

## **ESTABLECIMIENTOS DONDE SE DESARROLLEN ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA**

El Decreto 139/2018, de 3 de julio, sobre los regímenes de intervención ambiental atmosférica donde se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera de Cataluña<sup>3</sup>, tiene por objetivo establecer los regímenes de intervención ambiental atmosférica de los establecimientos donde se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera en Cataluña, así como el registro y el sistema de control de las emisiones.

La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, y sin perjuicio de los demás medios de intervención administrativa previstos, establece la competencia de las Comunidades Autónomas para otorgar las autorizaciones administrativas para la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de aquellas instalaciones en las que se desarrollen alguna de las actividades incluidas en los grupos A y B del Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera que se recoge en el anexo IV de la Ley.

De este modo, el Decreto 139/2018 se destina a establecer dichos regímenes de intervención ambiental atmosférica de esta clase de establecimientos, así como el registro y el sistema de control de las emisiones. En cuanto a su estructura, el Decreto se divide en siete capítulos (cuarenta y dos artículos), cuatro disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, cinco disposiciones finales y dos anexos técnicos.

---

<sup>3</sup> Vid. DOGC núm. 7657 de 5 de julio de 2018, que entró en vigor el 25 de julio de 2018.

Las normas derogadas por el citado Decreto, son las siguientes:

- a) El capítulo VII, el anexo 1 y el anexo 2 del Decreto 322/1987, de 23 de septiembre, de desarrollo de la Ley 22/1983, de 21 de noviembre, de protección del ambiente atmosférico.
- b) El artículo 6 del Decreto 319/1998, de 15 de diciembre, sobre límites de emisión para instalaciones industriales de combustión de potencia térmica inferior a 50 MWt e instalaciones de cogeneración.

Además, se introducen modificaciones parciales en las siguientes normas:

- a) El Decreto 319/1998, de 15 de diciembre, sobre límites de emisión para instalaciones industriales de combustión de potencia térmica inferior a 50 MWt e instalaciones de cogeneración.
- b) El Decreto 22/1998, de 4 de febrero, sobre límites de emisión a la atmósfera para instalaciones de tostado y torrefacción de café.

El capítulo I, dedicado a las disposiciones generales, se integra por un artículo de definiciones y otro de distribución de competencias entre Comunidad Autónoma y municipios, así como el régimen de obligaciones de los titulares de establecimientos con emisiones a la atmósfera, entre otras cuestiones.

Posteriormente en el capítulo II se establece el régimen de intervención ambiental atmosférica y control de los establecimientos donde se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, dedicándose la sección 1ª al régimen autorizatorio para los establecimientos clasificados en el grupo A y B del Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera<sup>4</sup>. En este sentido, en el artículo 9 se regula el procedimiento autorizatorio, en el que se incluye el contenido de la solicitud, la participación de los municipios mediante audiencia, el plazo de resolución de nueve meses con silencio negativo, y el contenido mínimo de la autorización de emisiones, así como su régimen de renovación y revisión.

En la sección 2ª, se regula el régimen de notificación de emisiones<sup>5</sup>. Seguidamente, en la sección 3ª se incluye qué debe entenderse por modificación sustancial, en cuyo caso debe someterse a nueva autorización de emisiones, de conformidad con el artículo 15 del Decreto examinado. Por último, ya en la sección 4ª, se establecen las obligaciones de control de los titulares de establecimientos donde se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, a través de entidades colaboradoras de la Administración, así como la frecuencia de este control.

El capítulo III está dedicado a la regulación de la clasificación y registro de las emisiones, en el cual se establece cómo deben clasificarse las emisiones y los controles que deben seguirse. Por su parte el capítulo IV está dedicado a la medición de las emisiones.

El capítulo V regula la llamada Red de Emisiones Atmosféricas de Cataluña, formada por el conjunto de focos emisores y antorchas que deban realizar mediciones en continuo de conformidad con el artículo 28 del Decreto. La

---

<sup>4</sup> Anexo IV de la Ley 34/2007 y sus modificaciones posteriores a través del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero y del Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre.

<sup>5</sup> Grupo C del Anexo IV de la Ley 34/2007.

comunicación de datos a la Red será de forma telemática y en tiempo real. Por su parte, el capítulo VI establece las obligaciones relativas al control e información de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles causadas por el uso de disolventes y la elaboración del inventario de establecimientos afectados, de conformidad con el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero.

Por último, el capítulo VII establece la regulación de las antorchas, el aprovechamiento de biogás en depósitos controlados, el programa de mantenimiento y control de los sistemas destinados a minimizar las emisiones y los sistemas depuradores asociados a filtros biológicos.

#### **4. MODIFICACIONES EN LA DELIMITACIÓN DE DIVERSOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y EN EL MAPA DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA**

En materia de espacios naturales protegidos, cabe destacar el Decreto 138/2018, de 3 de julio, de la Generalitat de Catalunya, por el que se ha procedido a modificar las delimitaciones del Parque Natural de L'Alt Pirineu y del espacio del PEIN Alt Pirineu, previstas en el Decreto 194/2003, de 1 de agosto, de declaración del Parque Natural de L'Alt Pirineu<sup>6</sup>.

Los motivos de la modificación se hallan en la voluntad de varios municipios de incluir otras ubicaciones dentro del Parque Natural, así como poner fin a algunos problemas de delimitación del espacio, ya que se habían dejado fuera a algunos sectores de alto interés natural, que sí estaban incluidos en el Plan de espacios de interés natural y la red Natura 2000. Con ello se mejora, por tanto, la coherencia entre las delimitaciones de las diferentes figuras de protección.

También cabe destacar que, a través del acuerdo GOV/7/2018, de 12 de junio, se han aprobado las siguientes cuestiones concernientes a espacios Red Natura 2000 de la Comunidad Autónoma de Cataluña<sup>7</sup>:

---

<sup>6</sup> Vid. DOGC de 6 de julio de 2018.

<sup>7</sup> Vid. DOGC de 14 de junio de 2018.

- La modificación de la delimitación de la ZEPA Capçaleres del Ter i del Freser (código ES5120002) prevista en el Acuerdo GOV/112/2006, de 5 de septiembre.
- La proposición a la Comisión Europea para la modificación de las delimitaciones de los LIC Capçaleres del Ter i del Freser (código ES5120002) y Serra Cavallera (ES5120003), previstas en el Acuerdo GOV/112/2006, de 5 de septiembre.
- Y, supeditada a la aprobación de la Comisión Europea de la modificación de las delimitaciones de los LIC indicados, la modificación de las delimitaciones de las ZEC

Finalmente destacar que, a través de la Resolución TES/1536/2018, de 29 de junio<sup>8</sup>, se ha aprobado el Mapa de la protección contra la contaminación lumínica en Cataluña, dejando sin efecto el Mapa anterior de 19 de diciembre de 2007. Todo ello en seguimiento de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno y del Decreto 190/2015, de 25 de agosto, de desarrollo de dicha Ley.

## **5. EL ACUERDO GOV/12/2018, DE 12 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA LA ESTRATEGIA MARÍTIMA DE CATALUÑA**

A través del acuerdo GOV/12/2018, de 12 de junio<sup>9</sup>, el gobierno autonómico de Cataluña ha aprobado la denominada: “Estrategia marítima de Cataluña”.

Según afirma el citado instrumento, éste se enmarca dentro de la voluntad del gobierno catalán de ser un actor proactivo en procesos estratégicos clave en el marco de la Unión Europea, tales como la aplicación de la Directiva sobre ordenación del espacio marítimo<sup>10</sup> o las iniciativas para el desarrollo sostenible de la economía azul en el Mediterráneo occidental.

En cuanto a su contenido, la Estrategia marítima de Cataluña gira en torno a cuatro ámbitos de actuación (concernientes al desarrollo sostenible, los ecosistemas marinos, la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y la

---

<sup>8</sup> Vid. DOGC de 6 de julio de 2018.

<sup>9</sup> Vid. DOGC de 14 de junio de 2018.

<sup>10</sup> Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014.

gobernanza) y sus correspondientes objetivos estratégicos. Estos últimos son desplegados mediante Líneas Estratégicas de Actuación, las cuales, a su vez, conforman los Planes Estratégicos multianuales (para periodos de cuatro años). El primer período, 2018-2021, es también abordado en esta Estrategia marítima de Cataluña.

La Estrategia tiene como horizonte el año 2030 y gira en torno a los cuatro ámbitos de actuación: Desarrollo sostenible, integrado y armónico de la Economía Azul, respetuoso con el conjunto de los usos humanos del mar; ecosistemas marinos resilientes y plenamente funcionales; mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

Por último, destacar que se encomienda al Consejo Catalán de Cogestión Marítima la cogestión y gobernanza de la Estrategia marítima. El Consejo Catalán de Cogestión Marítima es el organismo que llevará a cabo la gobernanza de la Estrategia, basándose en los principios de democracia horizontal y de participación de todos los agentes con intereses en los diferentes ámbitos marítimos.

## **6. LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS Y RECURSOS DE CATALUÑA**

En materia de prevención y gestión de residuos, cabe destacar que a través del Real Decreto 210/2018, de 6 de abril<sup>11</sup>, se ha aprobado el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña, todo ello en el marco de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, la cual establece la obligación de las Comunidades Autónomas de elaborar este tipo de planes de acuerdo con el Plan estatal Marco de Gestión de residuos (PEMAR) 2016-2022 y el Programa estatal de prevención de residuos 2014-2020.

Este Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos, pretende ser el instrumento programático de la Generalitat de Cataluña para hacer frente a los retos estratégicos y objetivos en materia de prevención y gestión de residuos hasta el año 2020 y, de conformidad con el artículo 2 del Real

---

<sup>11</sup> *Vid.* BOE núm. 92, de 16 de abril de 2018 y DOGC núm. 7599, de 16 de abril de 2018.

Decreto, tiene por objeto definir el modelo de prevención y gestión de residuos y recursos de Cataluña, establecer los objetivos y programar las actuaciones y los instrumentos necesarios para lograr dichos objetivos.

En el artículo 6 del citado Real Decreto, se establecen diversos objetivos prioritarios en la prevención y gestión de residuos para el año 2020, entre los que destacan la reducción de la huella de carbono asociada a la gestión de residuos y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero<sup>12</sup>.

Además del programa anterior, a través del Real Decreto 209/2018, de 6 de abril, se ha aprobado el Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales de Cataluña (PINFRECAT20), de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos de Cataluña.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del Anexo de normativa recogido en el Real Decreto, el Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales de Cataluña tiene por objeto entre otros, la adaptación de las nuevas bases del modelo de gestión de residuos municipales establecidos en el Programa de gestión de residuos municipales de Cataluña, determinando los déficits actuales y futuros de infraestructuras que tienen que

---

<sup>12</sup> En concreto se recogen los siguientes:

- (i) Reducción de la huella de carbono asociada a la gestión de residuos y al uso de los recursos en Cataluña en un 30% respecto al año base 2012.
- (ii) Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero asociados a la deposición, el tratamiento biológico y la combustión de residuos municipales en un 30% respecto al año base 2012.
- (iii) Incrementar la eficiencia de captación de biogás de los depósitos controlados hasta un 60%.
- (iv) Reducción en un 15%, como mínimo, en peso la generación primaria total de residuos de Cataluña, municipales, industriales y de la construcción, respecto al año base 2010.
- (v) Reducción en un 50% en peso el despilfarro alimentario en los ámbitos de la distribución al por menor, la restauración, el servicio de comidas o catering y el ámbito doméstico respecto al año base 2010.
- (vi) Reducción en un 90% en peso el consumo de bolsas comerciales con asas desechables no compostables respecto al año base 2007.
- (vii) Incremento de la valorización global hasta el 65% de los residuos generados.
- (viii) Incremento de la recogida selectiva bruta hasta el 60% de los residuos municipales generados.
- (ix) Incremento de la valorización global hasta el 70% de los residuos municipales generados.

ser cubiertos para garantizar el modelo de gestión de residuos municipales exigido en cada momento por el ordenamiento jurídico de aplicación<sup>13</sup>.

Es importante destacar que, en Cataluña, la gestión de residuos de origen municipal, está integrados principalmente por los residuos domésticos y del pequeño comercio. La materia gestión de residuos, es una materia de competencia compartida entre los entes locales y la Generalidad de Cataluña. Por tanto, los entes locales son competentes en materia de gestión y la Generalitat lo es en materia de planificación. Es por ello que para el ejercicio correcto de las competencias de cada una de estas administraciones se necesitan instrumentos que aseguren la correcta gestión de los residuos que se producen en el territorio y el desarrollo de políticas de sostenibilidad que sean orientadas a maximizar la consideración del residuo como recurso. Entre estos instrumentos se encuentra este Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales de Cataluña 2020, el cual corresponde impulsar al Departamento de Territorio y Sostenibilidad, mediante la Agencia de Residuos de Cataluña, con la aprobación del Gobierno.

Este Plan Territorial Sectorial, supone el relevo y la reformulación del anterior Plan Territorial Sectorial (2005-2012), que había sido aprobado mediante el Decreto 16/2010, de 16 de febrero y debe permitir el desarrollo e implantación efectiva del nuevo Programa General de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña 2020 y avanzar en la integración de este vector ambiental en el conjunto de políticas de la Generalitat.

## **7. OTRAS NORMAS Y ACTUACIONES DE INTERÉS EN MATERIA AMBIENTAL**

---

<sup>13</sup> En concreto, se recogen los siguientes objetivos:

- (i) La adaptación de las nuevas bases del modelo de gestión de residuos municipales establecidos en el Programa de gestión de residuos municipales de Cataluña.
- (ii) La determinación de los criterios de implantación de las instalaciones de gestión de residuos en el escenario temporal previsto.
- (iii) La agrupación territorial mediante la determinación de las instalaciones que tienen que dar servicio a las diferentes comarcas, partiendo de los ámbitos funcionales delimitados por el Plan Territorial General de Cataluña.
- (iv) La exposición de la situación de las infraestructuras existentes y capacidades disponibles.
- (v) La determinación de los déficits actuales y futuros de infraestructuras que tienen que ser cubiertos para garantizar el modelo de gestión de residuos municipales exigido en cada momento por el ordenamiento jurídico de aplicación.

Además de las reseñadas, en el periodo objeto de análisis se han aprobado algunas otras normas de interés desde la perspectiva ambiental. Destacamos, entre otras, en primer lugar, el Decreto-ley 4/2018, de 17 de julio<sup>14</sup>, por el que se asume la gestión directa del servicio de abastecimiento de agua a poblaciones por medio de las instalaciones de la red de abastecimiento Ter-Llobregat de titularidad de la Generalidad y se crea el Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat.

Los antecedentes de esta disposición normativa son complejos, así cabe recordar, que la producción y el suministro de agua potable para el abastecimiento de agua en poblaciones por medio de la red de abastecimiento Ter-Llobregat es un servicio público de interés de la Generalidad y, por lo tanto, de su competencia<sup>15</sup>. En origen, la Generalidad de Cataluña prestó este servicio de forma directa, mediante el Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat, aunque el artículo 37.1 del texto refundido preveía expresamente que su explotación y gestión se podía realizar también de forma indirecta.

La Ley 10/2011, de 29 de diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa, introdujo una serie de modificaciones destinadas, por una parte, a facilitar la prestación del referido servicio público de forma indirecta, estableciendo los elementos esenciales de su régimen jurídico, y, por otra parte, a adaptar las funciones y la estructura de la Agencia Catalana del Agua a la nueva forma de prestación del referido servicio público. La disposición adicional segunda de esta Ley preveía la disolución del Ente de Abastecimiento de Agua, creado por la Ley 4/1990, de 4 de marzo, estableciendo que dicha disolución no produciría efectos hasta que no se hiciera efectiva la formalización de los contratos administrativos de gestión y prestación de los servicios públicos. Esta misma disposición atribuyó al departamento de adscripción del Ente de Abastecimiento la licitación y adjudicación de este contrato administrativo, que se formalizó en fecha 27 de diciembre de 2012.

Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 22 de junio de 2015 estimó parcialmente el recurso contencioso

---

<sup>14</sup> *Vid.* BOE de 23 de junio de 2018.

<sup>15</sup> Así lo dispone el artículo 34 del texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre.

administrativo interpuesto contra la Resolución 1/2013, de 2 de enero, del Órgano administrativo de recursos contractuales de Cataluña y confirmó la anulación del Acuerdo de adjudicación del contrato de gestión del servicio de abastecimiento de agua en alta Ter-Llobregat. En fecha 3 de abril de 2018, el TSJC ha declarado la firmeza de la Sentencia 390 de 22 de junio de 2015, dado que el Tribunal Supremo ha desestimado, mediante la Sentencia 269/2018, los recursos de casación interpuestos contra aquella.

Por tanto, este Decreto ley responde a los antecedentes indicados y adopta las medidas extraordinarias y de urgente necesidad para hacer frente a la problemática expuesta y, a este efecto, se crea el Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat encargado de la prestación del servicio de producción y suministro de agua potable para el abastecimiento de poblaciones mediante aquellas instalaciones de la red de abastecimiento Ter- Llobregat de titularidad de la Generalidad.

Este Decreto ley se estructura en 17 artículos agrupados en dos capítulos, cinco disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, tres disposiciones finales y un anexo.

Los artículos que integran el capítulo 1, además de la definición del objeto del Decreto ley, disponen la creación del Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat, definen su naturaleza jurídica como entidad de derecho público de la Generalidad de Cataluña de las previstas en el artículo 1.b1. del Estatuto de la Empresa Pública Catalana, establecen su adscripción al departamento con competencias en materia de aguas, describen sus funciones y fijan aquellos otros contenidos mínimos de las leyes de creación de este tipo de entidades de derecho público, de conformidad con los artículos 21 y 3.1 del Estatuto de la Empresa Pública Catalana, como los recursos económicos que se le asignan, entre los cuales cabe destacar la tarifa por la prestación del servicio, su régimen jurídico y las bases de su organización.

El Decreto ley configura este ente como un operador que produce agua potable y la distribuye entre sus usuarios, mediante la explotación de las instalaciones de titularidad de la Generalidad que integran la red de abastecimiento Ter-Llobregat. En todo caso, la prestación de este servicio resta sujeta a las

facultades reservadas a la Agencia Catalana del Agua en materia de planificación, de adopción de decisiones sobre el origen, asignación y reparto de recursos hídricos, y de control y vigilancia de las instalaciones que integran la red, por el texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre.

Cambiando de tema, en concreto entrando en la materia de turismo sostenible, cabe destacar la Resolución TES/998/2018 de 25 de abril<sup>16</sup>, por la cual se aprueban los criterios ambientales para el otorgamiento del Distintivo de garantía de calidad ambiental en los campings.

También en la misma línea indicada de turismo sostenible, cabe destacar la Resolución TES/1942/2018 de 28 de mayo<sup>17</sup>, por la que se aprueban los criterios ambientales para el otorgamiento del Distintivo de garantía de calidad ambiental a los molinos de aceite.

En materia de subvenciones, cabe destacar la aprobación de las bases de numerosas convocatorias para el otorgamiento de subvenciones en ámbitos sectoriales diversos (por ejemplo, en materia de desarrollo rural<sup>18</sup>, en materia de iluminación exterior<sup>19</sup>, en materia de desarrollo local<sup>20</sup>).

En materia de caza y régimen cinegético, destacar que mediante Resolución ARP/1447/2018 de 26 de junio, se declaran sometidos al régimen cinegético de caza controlada los terrenos de la bahía de El Fangar, El Garxal y las playas de la isla de Buda, en los términos municipales de Deltebre y Sant Jaume d'Enveja. Esta resolución está publicada en el DOGC de 2 de julio de 2018.

---

<sup>16</sup> Vid. DOGC de 4 de junio de 2018, iniciando su vigencia en la misma fecha de publicación.

<sup>17</sup> Vid. DOGC de 17 de agosto de 2018, iniciándose su vigencia en la misma fecha de publicación.

<sup>18</sup> Orden ARP/141/2018, de 1 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la aplicación del desarrollo local participativo Leader en el marco del Programa de desarrollo rural de Cataluña 2014-2020 -operación 19.02.01-). Publicadas en el DOGC de 8 de agosto de 2018.

<sup>19</sup> Orden TES/130/2018, de 24 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para actuaciones de ordenación ambiental de la iluminación exterior. Fueron publicadas en el DOGC de la Generalitat el 31 de julio de 2018.

<sup>20</sup> Orden TSF/123/2018 de 24 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a los Programas de apoyo al desarrollo local. Publicada en el DOGC de 27 de julio de 2018 y Resolución

TES/1548/2018 de 4 de julio, por el cual se resuelven las subvenciones destinadas a cofinanciar gastos realizados por entes locales para redacción de estudios técnicos de detalle para reducir impactos al medio de desbordamientos de los sistemas públicos de saneamiento.

Finalmente, a través de la Resolución TES/294/2018 de 22 de febrero, se aprueba el Programa de inspección ambiental integrada para el año 2018. En virtud de este programa, la Generalitat inspeccionará 671 establecimientos de entre los considerados potencialmente de alta incidencia ambiental, clasificados en cuatro grupos de actividades: industriales/energéticas –como ciclos combinados para la producción de energía eléctrica, refinerías de petróleo, fabricación de cemento, vidrieras, industria química de base, fundidoras, industria textil, o industria agroalimentaria–, actividades de gestión de residuos, depósitos controlados de residuos, y grandes explotaciones ganaderas –para la cría de gallinas ponedoras, cerdos de engorde y cerdas reproductoras.

Como novedad, este año el programa reduce la categoría del riesgo evaluada para aquellos establecimientos registrados en el sistema EMAS que en las últimas inspecciones hayan acreditado un cumplimiento satisfactorio o adecuado de la autorización ambiental. Esta reducción de la categoría de riesgo comporta una reducción de la periodicidad de inspección.

Esta resolución fue publicada en el DOGC de 28 de febrero de 2018 y entró en vigor el 20 de marzo de 2018.

**Sumari:** 1. Introducció. 2. Conflictivitat competencial en matèria ambiental. Recursos d'inconstitucionalitat i conflictes de competències resolts en aquest segon semestre. 3. El Decret 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d'intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera. 4. Modificacions en la delimitació de diversos espais naturals protegits i en el mapa de protecció contra la contaminació lumínica. 5. L'estratègia marítima de Catalunya. 6. Programes de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya. 7. Altres normes i actuacions d'interès en matèria ambiental.

## 1. INTRODUCCIÓ

En el període examinat (del 31 de març de 2018 al 31 d'octubre de 2018) no són gaires les novetats normatives en matèria ambiental que s'han produït a Catalunya. Com ja es va indicar en la crònica anterior, aquest fet no ha d'estranyar si tenim en compte la conjuntura política que es viu en aquesta comunitat autònoma. Després de l'1 d'octubre i del llarg període en el qual van estar en vigor les mesures autoritzades pel Senat en aplicació de l'article 155 de la Constitució, no ha estat fins al mes de juny de 2018 que s'han format nous governs de la Generalitat i de l'Estat. En aquestes circumstàncies, amb un nou Parlament català constituït el 16 de gener, però amb la constitució d'un nou Govern català, demorada fins al 2 de juny de 2018, l'actuació normativa en matèria ambiental ha estat molt limitada.

En aquest context, en l'àmbit parlamentari i en relació amb la normativa ambiental catalana, cal destacar el Projecte de Llei d'ordenació del litoral, aprovat pel Consell Executiu de la Generalitat el 23 d'octubre, que pretén articular un model de gestió integrada de l'espai costaner, seguint les recomanacions de la Unió Europea, que començarà la seva tramitació parlamentària. El Govern ja va aprovar el projecte a l'octubre de 2017, de la qual cosa es va fer referència en una crònica anterior, però la finalització de la legislatura va impedir que s'iniciés la discussió parlamentària en aquell moment.

També és interessant destacar dues proposicions de Llei en matèria ambiental que es troben en tràmit actualment. La primera d'aquestes és la Proposició de Llei d'espais agraris<sup>21</sup>, que té com a objectiu ordenar la gestió dels espais agraris a Catalunya i dissenyar els mecanismes necessaris per donar seguretat

---

<sup>21</sup> Legislatura XII. Núm. expedient 202-00026/12 (tramitació per procediment d'urgència).

jurídica als titulars de les explotacions agràries. En segon lloc, cal destacar la Proposició de Llei de protecció d'oliveres monumentals,<sup>22</sup> que té per objectiu aturar i evitar la degradació i la desaparició d'aquest patrimoni, tot establint mecanismes i instruments de planificació que n'assegurin una adequada gestió i la permanència en el lloc que les ha vist arrelar-se, i prohibint-ne de manera explícita l'extracció, el trasplantament i la comercialització.

No obstant això, sí que cal remarcar la conflictivitat competencial que posen de manifest els nombrosos processos pendents de resolució del Tribunal Constitucional, ja siguin recursos d'inconstitucionalitat, ja siguin conflictes de competència, alguns dels quals afecten matèries ambientals i s'han resolt en aquest període.

En un altre pla, en l'àmbit reglamentari, destaca el Decret 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d'intervenció ambiental atmosfèrica on es desenvolupin activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera de Catalunya.

Finalment, s'implementen instruments de planificació i política ambiental, entre els quals cal destacar els acords d'aprovació de l'estratègia marítima de Catalunya i els programes de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya.

## **2. CONFLICTIVITAT COMPETENCIAL EN MATÈRIA AMBIENTAL. RECURSOS D'INCONSTITUCIONALITAT I CONFLICTES DE COMPETÈNCIES RESOLTS EN AQUEST SEGON SEMESTRE**

Com s'indicava en la introducció d'aquesta crònica, són nombrosos els processos pendents de resolució del Tribunal Constitucional, ja siguin recursos d'inconstitucionalitat, ja siguin conflictes de competència, alguns dels quals afecten matèries ambientals i s'han resolt en aquest període.

Així, en el mes de juny de 2018, després de la formació del nou Govern de Catalunya, el Ple del Tribunal Constitucional va decidir, per unanimitat, dictar diverses providències en les quals s'acorda donar trasllat a la Generalitat de Catalunya, per formular les al·legacions oportunes en els nombrosos recursos d'inconstitucionalitat presentats pel Govern d'Espanya contra lleis catalanes. La

---

<sup>22</sup> Legislatura XII. Núm. expedient 202-00023/12 (tramitació per procediment d'ordinari).

seva tramitació estava suspesa per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Els magistrats consideren que, després de la formació del nou Govern de Catalunya, s'ha produït la pèrdua de vigència del Reial decret 944/2017, de 27 d'octubre, pel qual es designaven òrgans i autoritats encarregades d'acomplir les mesures dirigides al Govern i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a l'empara de l'article 155 de la Constitució.

En concret, en matèria ambiental, cal recordar que està en tràmit el recurs d'inconstitucionalitat plantejat contra la Llei catalana 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. L'Estat va impugnar entre d'altres, els preceptes pels quals s'havia creat l'Impost sobre el risc ambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d'elements radiotòxics, en considerar que contradiuen els apartats 2 i 3 de l'article 6 de l'LOFCA, per la coincidència amb els fets imposables de l'Impost estatal sobre producció de combustible nuclear gastat i els residus radioactius resultants de la generació d'energia nuclear elèctrica, regulat en la Llei estatal 15/2012, de 27 de desembre, de mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica, així com també pel possible solapament amb l'Impost d'activitats econòmiques.

Així mateix, en plantejar el recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei de Catalunya 16/2017, d'1 d'agost, del canvi climàtic, l'Estat va impugnar els preceptes pels quals es va crear l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, en considerar que es produïa la coincidència de fets imposables prohibida per l'article 6.2 i .3, de la LOFCA, quant a l'impost sobre determinats mitjans de transport, regulat en la Llei estatal 38/1992, de 28 de desembre, d'impostos especials, i amb l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, regulat en la Llei d'hisendes locals. Aquesta mateixa Llei catalana 16/2017, d'1 d'agost, del canvi climàtic, va ser impugnada, també, en molts altres dels seus preceptes, per una suposada vulneració de les competències en matèria de medi ambient, com per exemple les previsions relatives als objectius de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, el marc estratègic de referència de la mitigació, els pressupostos

del carboni i l'inventari d'emissions a l'atmosfera i d'embornals de CO<sup>2</sup> a Catalunya, les mesures dirigides a l'adaptació al canvi climàtic com el marc estratègic de referència d'adaptació, els instruments de planificació i programació, així com altres mesures sectorials, com la interconnexió de xarxes de proveïment d'aigua, les mesures adreçades a la transició cap a un model energètic renovable, desnuclearitzat, descarbonitzat, lliure d'activitats prospectives i d'explotació per fracturació hidràulica (*fracking*), la declaració del Mediterrani com a zona lliure de prospeccions i d'extracció d'hidrocarburs, la promoció d'un sector de l'automoció que no sigui de combustió interna fòssil, la creació d'un fons climàtic, l'actuació respecte del comerç de drets d'emissió, i la subjecció dels edificis nous i els sotmesos a grans rehabilitacions segons el compliment dels requisits corresponents a un edifici de consum d'energia gairebé nul. En el recurs, l'Estat va considerar que s'envaeixen les competències reservades a l'Estat en matèria de bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica, en matèria d'hisenda, en matèria de legislació bàsica de medi ambient i en matèria de les bases del règim miner i energètic (art. 149.1.13, .14, .25 i .23 CE), així com altres àmbits sectorials afectats per les mesures específiques.

Al seu torn, el Govern de la Generalitat de Catalunya va plantejar un conflicte de competències davant del Govern de l'Estat en relació amb determinats preceptes del Reial decret 264/2017, de 17 de març, pel qual s'estableixen les bases reguladores per al finançament de l'adaptació de les línies elèctriques d'alta tensió d'acord amb els requisits establerts en el Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies elèctriques d'alta tensió. La norma va establir les bases reguladores de les ajudes als titulars de les línies elèctriques, prèvia convocatòria que haurà de fer cada any el secretari d'estat de Medi Ambient, va encomanar la gestió i concessió centralitzada de les ajudes al Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, i va invocar les competències de l'Estat en matèria de legislació bàsica sobre protecció del medi ambient i de bases del règim miner i energètic (art. 149.1.23 i .25 CE). Però el Reial decret no va tenir en compte que la Generalitat ha assumit tant la competència compartida en matèria de medi ambient com una competència de

caràcter exclusiu en matèria d'espais naturals, així com la gestió dels espais naturals situats a Catalunya en règim de protecció estatal (art. 144 EAC). A més, quant a la concessió de subvencions, la Generalitat ha assumit la competència prevista en l'article 114 de l'EAC, i el TC ha establert una reiterada doctrina en la qual ha reconegut la necessària gestió descentralitzada per les CCAA de les subvencions estatals en les matèries en les quals les competències executives corresponen a les comunitats autònomes.

Aquest conflicte de competències s'ha resolt mitjançant la Sentència 88/2018, de 19 de juliol de 2018. En la seva decisió, l'alt tribunal estima parcialment el conflicte de competències interposat per la Generalitat i declara contraris a l'ordre constitucional els preceptes del Reial decret, que fan referència al secretari d'estat de Medi Ambient o al Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient com a responsables de la convocatòria d'ajudes per a la protecció d'aus de les línies elèctriques. “Es tracta de funcions de naturalesa executiva que contravenen l'ordre constitucional de distribució de competències”, assenyala el TC, que entén que els preceptes en qüestió vulneren les competències de la Generalitat.

D'altra banda, el Tribunal Constitucional ha dictat Sentència 69/2018, de 21 de juny de 2018, per la qual resol el recurs d'inconstitucionalitat plantejat pel Govern de la Generalitat de Catalunya contra diversos preceptes de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència. El Tribunal Constitucional resol que “no és possible apreciar el desapoderament competencial denunciat pel Govern de la Generalitat de Catalunya quant a la «gestió» del fons nacional d'eficiència energètica”. La Sala arriba a una conclusió diferent pel que fa a la gestió dels certificats d'estalvi energètic, que també s'encomana a l'Estat a través de l'IDAE. La Sala entén que aquesta gestió és una activitat vinculada al reconeixement i la concessió de l'Estat; per tant, una “activitat executiva reglada en alt grau”, que, en aquest cas, tractant-se de la matèria “energia”, les CCAA en tenen reservades les competències de gestió i execució. Per tant, en aquest supòsit, l'Estat no té reservades les potestats d'execució i aplicació de les normes.

També ha resolt el Tribunal Constitucional, en Sentència 64/2018, de 7 de juny de 2018, el conflicte positiu de competència interposat per la Generalitat de Catalunya en relació amb els articles 6, 7.1, 2, 4, 5 i 6; 9.1; 11.2 i l'annex II del Reial decret 1007/2015, de 6 de novembre, pel qual es regula l'adquisició pel fons de carboni per a una economia sostenible, de crèdits de carboni del Pla d'Impuls al Medi Ambient en el Sector de l'Empresa «PIMA Empresa» per a la Reducció de Gasos d'Efecte Hivernacle a les seves Instal·lacions. En aquest cas, el Tribunal Constitucional analitza si en el marc de l'article 149.1.23 de la Constitució, l'Estat pot assumir les funcions executives que estableix l'RD 1007/2015 en relació amb la tramitació de sol·licituds, valoració i adquisició de crèdits de carboni, i entén que no concorre l'excepcionalitat que ho justificaria, de tal forma que estima parcialment el conflicte.

El mateix argument concorre en la Sentència 62/2018 del Ple del Tribunal Constitucional, de 7 de juny de 2018, que resol el conflicte positiu de competència interposat per la Generalitat de Catalunya en relació amb els articles 2.1; 5.1, 3, 4, 5 i 6; 6; 7.2 i 3; 8.1 i 10 del Reial decret 635/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula l'adquisició de crèdits futurs de carboni pel fons de carboni per a una economia sostenible, en desenvolupament del Pla d'Impuls al Medi Ambient en el Sector Hotelier PIMA Sol per a la rehabilitació energètica de les seves instal·lacions.

### **3. EL DECRET 139/2018, DE 3 DE JULIOL, SOBRE ELS RÈGIMS D'INTERVENCIÓ AMBIENTAL ATMOSFÈRICA DELS ESTABLIMENTS ON ES DESENVOLUPIN ACTIVITATS POTENCIALMENT CONTAMINANTS DE L'ATMOSFERA**

El Decret 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d'intervenció ambiental atmosfèrica on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l'atmosfera de Catalunya<sup>23</sup>, té per objectiu establir els règims d'intervenció

---

<sup>23</sup> Vegeu DOGC, núm. 7657 de 5 de juliol de 2018, que va entrar en vigor el 25 de juliol de 2018.

Les normes derogades per l'esmentat Decret són les següents:

a) El capítol VII, l'annex 1 i l'annex 2 del Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desenvolupament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric.

b) L'art. 6 del Decret 319/1998, de 15 de desembre, sobre límits d'emissió per a instal·lacions industrials de combustió de potència tèrmica inferior a 50 MWt i instal·lacions de cogeneració.

A més, s'introdueixen modificacions parcials en les normes següents:

ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l'atmosfera a Catalunya, així com el registre i el sistema de control de les emissions.

La Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, i sense perjudici dels altres mitjans d'intervenció administrativa previstos, estableix la competència de les comunitats autònomes per atorgar les autoritzacions administratives per a la construcció, el muntatge, l'explotació, el trasllat o la modificació substancial d'aquelles instal·lacions en les quals es desenvolupin alguna de les activitats incloses en els grups A i B del Catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera que es recull a l'annex IV de la Llei.

D'aquesta manera, el Decret 139/2018 es destina a establir aquests règims d'intervenció ambiental atmosfèrica d'aquesta classe d'establiments, així com el registre i el sistema de control de les emissions. Quant a la seva estructura, el Decret es divideix en set capítols (quaranta-dos articles), quatre disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria, cinc disposicions finals i dos annexos tècnics.

El capítol I, dedicat a les disposicions generals, està integrat per un article de definicions i un altre de distribució de competències entre comunitat autònoma i municipis, així com el règim d'obligacions dels titulars d'establiments amb emissions a l'atmosfera, entre d'altres qüestions.

Posteriorment, en el capítol II s'estableix el règim d'intervenció ambiental atmosfèrica i control dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l'atmosfera, i es dedica la secció 1a al règim d'autorització per als establiments classificats en el grup A i B del Catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera.<sup>24</sup> En aquest sentit, en l'article 9 es regula el procediment d'autorització, en el qual s'inclou el contingut de la sol·licitud, la participació dels municipis mitjançant audiència, el termini de

---

a) El Decret 319/1998, de 15 de desembre, sobre límits d'emissió per a instal·lacions industrials de combustió de potència tèrmica inferior a 50 MWt i instal·lacions de cogeneració.

b) El Decret 22/1998, de 4 de febrer, sobre límits d'emissió a l'atmosfera per a instal·lacions de torrat i torrefacció de cafè.

<sup>24</sup> Annex IV de la Llei 34/2007 i les seves modificacions posteriors a través del Reial decret 100/2011, de 28 de gener i del Reial decret 1042/2017, de 22 de desembre.

resolució de nou mesos amb silenci negatiu i el contingut mínim de l'autorització d'emissions, així com el seu règim de renovació i revisió.

En la secció 2a es regula el règim de notificació d'emissions.<sup>25</sup> A continuació, en la secció 3a s'inclou que s'ha d'entendre per modificació substancial, cas en què s'ha de sotmetre a nova autorització d'emissions, de conformitat amb l'article 15 del Decret examinat. Finalment, ja en la secció 4a, s'estableixen les obligacions de control dels titulars d'establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l'atmosfera, a través d'entitats col·laboradores de l'Administració, així com la freqüència d'aquest control.

El capítol III està dedicat a la regulació de la classificació i el registre de les emissions, en el qual s'estableix com han de classificar-se les emissions i els controls que cal seguir. Per la seva banda, el capítol IV està dedicat al mesurament de les emissions.

El capítol V regula l'anomenada Xarxa d'Emissions Atmosfèriques de Catalunya, formada pel conjunt de focus emissors i torxes que hagin de dur a terme mesuraments en continu de conformitat amb l'article 28 del Decret. La comunicació de dades a la Xarxa s'ha de fer de forma telemàtica i en temps real. Per la seva banda, el capítol VI estableix les obligacions relatives al control i la informació de les emissions de compostos orgànics volàtils causades per l'ús de dissolvents i l'elaboració de l'inventari d'establiments afectats, de conformitat amb el Reial decret 117/2003, de 31 de gener.

Finalment, el capítol VII estableix la regulació de les torxes, l'aprofitament de biogàs en dipòsits controlats, el programa de manteniment i el control dels sistemes destinats a minimitzar les emissions i els sistemes depuradors associats a filtres biològics.

#### **4. MODIFICACIONS EN LA DELIMITACIÓ DE DIVERSOS ESPAIS NATURALS PROTEGITS I EN EL MAPA DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA**

En matèria d'espais naturals protegits, cal destacar el Decret 138/2018, de 3 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'ha procedit a modificar les

---

<sup>25</sup> Grup C de l'annex IV de la Llei 34/2007.

delimitacions del Parc Natural de l'Alt Pirineu i de l'espai del PEIN Alt Pirineu, previstes en el Decret 194/2003, d'1 d'agost, de declaració del Parc Natural de l'Alt Pirineu.<sup>26</sup>

Els motius de la modificació es troben en la voluntat de diversos municipis d'incloure altres ubicacions dins del Parc Natural, així com de posar fi a alguns problemes de delimitació de l'espai, ja que s'havien deixat fora alguns sectors d'alt interès natural, que sí que estaven inclosos en el Pla d'Espais d'Interès Natural i la xarxa Natura 2000. Amb això es millora, per tant, la coherència entre les delimitacions de les diferents figures de protecció.

També es pot destacar que, a través de l'acord GOV/7/2018, de 12 de juny, s'han aprovat les qüestions següents relatives a espais xarxa Natura 2000 de la Comunitat Autònoma de Catalunya:<sup>27</sup>

- La modificació de la delimitació de la ZEPA Capçaleres del Ter i del Freser (codi ES5120002) prevista en l'Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre.
- La proposició a la Comissió Europea per a la modificació de les delimitacions dels LIC Capçaleres del Ter i del Freser (codi ES5120002) i Serra Cavallera (ES5120003), previstes en l'Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre.
- I, supeditada a l'aprovació de la Comissió Europea de la modificació de les delimitacions dels LIC indicats, la modificació de les delimitacions de les ZEC

Finalment, es pot destacar que a través de la Resolució TES/1536/2018, de 29 de juny,<sup>28</sup> s'ha aprovat el Mapa de la protecció contra la contaminació lumínica a Catalunya, deixant sense efecte el Mapa anterior de 19 de desembre de 2007. Tot això en compliment de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del mitjà nocturn i del Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desenvolupament d'aquesta Llei.

## **5. L'ACORD GOV/12/2018, DE 12 DE JUNY, PEL QUAL S'APROVA L'ESTRATÈGIA MARÍTIMA DE CATALUNYA**

---

<sup>26</sup> Vegeu DOGC de 6 de juliol de 2018.

<sup>27</sup> Vegeu DOGC de 14 de juny de 2018.

<sup>28</sup> Vegeu DOGC de 6 de juliol de 2018.

A través de l'acord GOV/12/2018, de 12 de juny,<sup>29</sup> el govern autonòmic de Catalunya ha aprovat l'anomenada "Estratègia marítima de Catalunya".

Segons afirma l'instrument esmentat, aquest s'emmarca dins de la voluntat del govern català de ser un actor proactiu en processos estratègics clau en el marc de la Unió Europea, tals com l'aplicació de la Directiva sobre ordenació de l'espai marítim<sup>30</sup> o les iniciatives per al desenvolupament sostenible de l'economia blava en el Mediterrani occidental.

Quant al seu contingut, l'Estratègia marítima de Catalunya gira entorn de quatre àmbits d'actuació (que es refereixen al desenvolupament sostenible, als ecosistemes marins, a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i a la governança) i els seus corresponents objectius estratègics. Aquests últims es despleguen mitjançant línies estratègiques d'actuació, les quals, al seu torn, formen els plans estratègics multianuals (per a períodes de quatre anys). El primer període, 2018-2021, és també abordat en aquesta Estratègia marítima de Catalunya.

L'Estratègia té com a horitzó l'any 2030 i gira entorn dels àmbits d'actuació: desenvolupament sostenible, integrat i harmònic de l'Economia Blava, respectuós amb el conjunt dels usos humans del mar; ecosistemes marins resilents i plenament funcionals; millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

Finalment, cal destacar que s'encomana al Consell Català de Cogestió Marítima la cogestió i la governança de l'Estratègia marítima. El Consell Català de Cogestió Marítima és l'organisme que durà a terme la governança de l'Estratègia, basant-se en els principis de democràcia horitzontal i de participació de tots els agents amb interessos en els diferents àmbits marítims.

## **6. ELS PROGRAMES DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS I RECURSOS DE CATALUNYA**

En matèria de prevenció i gestió de residus, es pot destacar que a través del Reial decret 210/2018, de 6 d'abril,<sup>31</sup> s'ha aprovat el Programa de Prevenció i

---

<sup>29</sup> Vegeu DOGC de 14 de juny de 2018.

<sup>30</sup> Directiva 2014/89/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014.

<sup>31</sup> Vegeu BOE núm. 92, de 16 d'abril de 2018, i DOGC núm. 7599, de 16 d'abril de 2018.

Gestió de Residus i Recursos de Catalunya, tot això en el marc de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, la qual estableix l'obligació de les comunitats autònomes d'elaborar aquest tipus de plans d'acord amb el Pla Estatal Marc de Gestió de Residus (PEMAR) 2016-2022 i el Programa Estatal de Prevenció de Residus 2014-2020.

Aquest Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos pretén ser l'instrument programàtic de la Generalitat de Catalunya per fer front als reptes estratègics i els objectius en matèria de prevenció i gestió de residus fins a l'any 2020 i, de conformitat amb l'article 2 del Reial decret, té per objecte definir el model de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, establir els objectius i programar les actuacions i els instruments necessaris per aconseguir aquests objectius.

En l'article 6 de l'esmentat Reial decret s'estableixen diversos objectius prioritaris en la prevenció i gestió de residus per a l'any 2020, entre els quals destaquen la reducció de la petjada de carboni associada a la gestió de residus i la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle.<sup>32</sup>

A més del programa anterior, a través del Reial decret 209/2018, de 6 d'abril, s'ha aprovat el Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PINFRECAT20), de conformitat amb el que es disposa en el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus de Catalunya.

---

<sup>32</sup> En concret, es recullen els següents:

- (i) Reducció de la petjada de carboni associada a la gestió de residus i a l'ús dels recursos a Catalunya en un 30% respecte a l'any base 2012.
- (ii) Reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle associats a la deposició, el tractament biològic i la combustió de residus municipals en un 30% respecte a l'any base 2012.
- (iii) Incrementar l'eficiència de captació de biogàs dels dipòsits controlats fins a un 60%.
- (iv) Reducció en un 15%, com a mínim, en pes la generació primària total de residus de Catalunya, municipals, industrials i de la construcció, respecte a l'any base 2010.
- (v) Reducció en un 50% en pes el malbaratament alimentari en els àmbits de la distribució al detall, la restauració, el servei de menjars o *catering* i l'àmbit domèstic respecte a l'any base 2010.
- (vi) Reducció en un 90% en pes el consum de bosses comercials amb nanses d'un sol ús no compostables respecte a l'any base 2007.
- (vii) Increment de la valorització global fins al 65% dels residus generats.
- (viii) Increment de la recollida selectiva bruta fins al 60% dels residus municipals generats.
- (ix) Increment de la valorització global fins al 70% dels residus municipals generats.

D'acord amb el que es disposa en l'article 2 de l'annex de normativa recollit en el Reial decret, el Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya té per objecte, entre d'altres, l'adaptació de les noves bases del model de gestió de residus municipals establerts en el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya, i la determinació dels dèficits actuals i futurs d'infraestructures que s'han de cobrir per garantir el model de gestió de residus municipals exigint en cada moment per l'ordenament jurídic d'aplicació.<sup>33</sup>

És important destacar que a Catalunya els residus d'origen municipal que es gestionen estan integrats, principalment, pels residus domèstics i del petit comerç. La gestió de residus és una matèria de competència compartida entre els ens locals i la Generalitat de Catalunya. Per tant, els ens locals són competents en matèria de gestió i la Generalitat ho és en matèria de planificació. És per això que, per exercir correctament les competències de cadascuna d'aquestes administracions, es necessiten instruments que assegurin la correcta gestió dels residus que es produeixen al territori i el desenvolupament de polítiques de sostenibilitat que estiguin orientades a maximitzar la consideració del residu com a recurs. Entre aquests instruments es troba aquest Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2020, l'impuls del qual correspon al Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant l'Agència de Residus de Catalunya, amb l'aprovació del Govern.

Aquest Pla Territorial Sectorial, suposa el relleu i la reformulació de l'anterior Pla Territorial Sectorial (2005-2012), que s'havia aprovat mitjançant el Decret 16/2010, de 16 de febrer, i ha de permetre el desenvolupament i la implantació

---

<sup>33</sup> En concret, es recullen els següents objectius següents:

- (i) L'adaptació de les noves bases del model de gestió de residus municipals establerts en el Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya.
- (ii) La determinació dels criteris d'implantació de les instal·lacions de gestió de residus en l'escenari temporal previst.
- (iii) L'agrupació territorial mitjançant la determinació de les instal·lacions que han de donar servei a les diferents comarques, partint dels àmbits funcionals delimitats pel Pla Territorial General de Catalunya.
- (iv) L'exposició de la situació de les infraestructures existents i capacitats disponibles.
- (v) La determinació dels dèficits actuals i futurs d'infraestructures que s'han de cobrir per garantir el model de gestió de residus municipals exigint en cada moment per l'ordenament jurídic d'aplicació.

efectiva del nou Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2020 i avançar en la integració d'aquest vector ambiental en el conjunt de polítiques de la Generalitat.

## **7. ALTRES NORMES I ACTUACIONS D'INTERÈS EN MATÈRIA AMBIENTAL**

A més de les ressenyades, en el període objecte d'anàlisi s'han aprovat algunes altres normes d'interès des de la perspectiva ambiental. Destaquem, entre d'altres, en primer lloc, el Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol,<sup>34</sup> pel qual s'assumeix la gestió directa del servei de proveïment d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa de proveïment Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat i es crea l'Ens de Proveïment d'Aigua Ter-Llobregat.

Els antecedents d'aquesta disposició normativa són complexos. Així, cal recordar que la producció i el subministrament d'aigua potable per al proveïment d'aigua en poblacions per mitjà de la xarxa de proveïment Ter-Llobregat és un servei públic d'interès de la Generalitat i, per tant, de la seva competència.<sup>35</sup> En origen, la Generalitat de Catalunya va prestar aquest servei de forma directa, mitjançant l'Ens de Proveïment d'Aigua Ter-Llobregat, encara que l'article 37.1 del text refós preveia expressament que les seves explotació i gestió es podien dur a terme també de forma indirecta.

La Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millora de la regulació normativa va introduir una sèrie de modificacions destinades, d'una banda, a facilitar la prestació de servei públic esmentat de forma indirecta, establint els elements essencials del seu règim jurídic, i, d'altra banda, a adaptar les funcions i l'estructura de l'Agència Catalana de l'Aigua a la nova forma de prestació del servei públic esmentat. La disposició addicional segona d'aquesta Llei preveia la dissolució de l'Ens de Proveïment d'Aigua, creat per la Llei 4/1990, de 4 de març, i establia que aquesta dissolució no produiria efectes fins que no es fes efectiva la formalització dels contractes administratius de gestió i prestació dels serveis públics. Aquesta mateixa disposició va atribuir al

---

<sup>34</sup> Vegeu BOE de 23 de juny de 2018.

<sup>35</sup> Així ho disposa l'art. 34 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

Departament d'adscripció de l'Ens de Proveïment la licitació i adjudicació d'aquest contracte administratiu, que es va formalitzar en data 27 de desembre de 2012.

No obstant això, la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), de 22 de juny de 2015, va estimar parcialment el recurs contenciós administratiu interposat contra la Resolució 1/2013, de 2 de gener, de l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya i va confirmar l'anul·lació de l'Acord d'adjudicació del contracte de gestió del servei de proveïment d'aigua en alta Ter-Llobregat. En data 3 d'abril de 2018, el TSJC ha declarat la fermesa de la Sentència 390, de 22 de juny de 2015, atès que el Tribunal Suprem ha desestimat, mitjançant la Sentència 269/2018, els recursos de cassació interposats contra aquella.

Per tant, aquest Decret llei respon als antecedents indicats i adopta les mesures extraordinàries i d'urgent necessitat per fer front a la problemàtica exposada i, amb aquesta finalitat, es crea l'Ens de Proveïment d'Aigua Ter-Llobregat, encarregat de la prestació del servei de producció i subministrament d'aigua potable per al proveïment de poblacions mitjançant aquelles instal·lacions de la xarxa de proveïment Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat.

Aquest Decret llei s'estructura en 17 articles agrupats en dos capítols, cinc disposicions addicionals, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria, tres disposicions finals i un annex.

Els articles que integren el capítol 1, a més de la definició de l'objecte del Decret llei, disposen la creació de l'Ens de Proveïment d'Aigua Ter-Llobregat, en defineixen la naturalesa jurídica com a entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya de les previstes en l'article 1.b1. de l'Estatut de l'empresa pública catalana, estableixen la seva adscripció al Departament amb competències en matèria d'aigües, descriuen les seves funcions i fixen aquells altres continguts mínims de les lleis de creació d'aquest tipus d'entitats de dret públic, de conformitat amb els articles 21 i 3.1 de l'Estatut de l'empresa pública catalana, així com els recursos econòmics que se li assignen, entre els quals cal

destacar la tarifa per la prestació del servei, el seu règim jurídic i les bases de la seva organització.

El Decret llei configura aquest Ens com un operador que produeix aigua potable i la distribueix entre els seus usuaris, mitjançant l'explotació de les instal·lacions de titularitat de la Generalitat que integren la xarxa de proveïment Ter-Llobregat. En tot cas, la prestació d'aquest servei resta subjecta a les facultats reservades a l'Agència Catalana de l'Aigua en matèria de planificació, d'adopció de decisions sobre l'origen, l'assignació i el repartiment de recursos hídrics, i de control i vigilància de les instal·lacions que integren la xarxa, pel text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

Canviant de tema, en concret entrant en la matèria de turisme sostenible, cal destacar la Resolució TES/998/2018 de 25 d'abril,<sup>36</sup> per la qual s'aproven els criteris ambientals per a l'atorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental en els càmpings.

També en la mateixa línia indicada de turisme sostenible, cal destacar la Resolució TES/1942/2018 de 28 de maig,<sup>37</sup> per la qual s'aproven els criteris ambientals per a l'atorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental als molins d'oli.

En matèria de subvencions, cal destacar l'aprovació de les bases de nombroses convocatòries per a l'atorgament de subvencions en àmbits sectorials diversos (per exemple, en matèria de desenvolupament rural,<sup>38</sup> en matèria d'il·luminació exterior,<sup>39</sup> en matèria de desenvolupament local<sup>40</sup>).

---

<sup>36</sup> Vegeu DOGC de 4 de juny de 2018, que n'inicia la vigència en la mateixa data de publicació.

<sup>37</sup> Vegeu DOGC de 17 d'agost de 2018, que n'inicia la vigència en la mateixa data de publicació.

<sup>38</sup> Ordre ARP/141/2018, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes destinades a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 -operació 19.02.01-). Publicades en el DOGC de 8 d'agost de 2018.

<sup>39</sup> Ordre TES/130/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior. Van ser publicades en el DOGC de la Generalitat el 31 de juliol de 2018.

<sup>40</sup> Ordre TSF/123/2018 de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local. Publicada en el DOGC, de 27 de juliol de 2018, i Resolució TES/1548/2018, de 4 de juliol, per la qual es resolen les subvencions destinades a cofinançar despeses dels ens locals per a redacció d'estudis tècnics de detall per reduir impactes al medi de desbordaments dels sistemes públics de sanejament.

En matèria de caça i règim cinegètic, hom pot destacar que mitjançant Resolució ARP/1447/2018, de 26 de juny, es declaren sotmesos al règim cinegètic de caça controlada els terrenys de la badia del Fangar, el Garxal i les platges de l'illa de Buda, en els termes municipals de Deltebre i Sant Jaume d'Enveja. Aquesta Resolució està publicada en el DOGC de 2 de juliol de 2018.

Finalment, a través de la Resolució TES/294/2018 de 22 de febrer, s'aprova el Programa d'Inspecció Ambiental Integrada per a l'Any 2018. En virtut d'aquest programa, la Generalitat inspeccionarà 671 establiments d'entre els considerats potencialment d'alta incidència ambiental, classificats en quatre grups d'activitats: industrials/energètiques —com a cicles combinats per a la producció d'energia elèctrica, refineries de petroli, fabricació de ciment, vidrieres, indústria química de base, fonedores, indústria tèxtil o indústria agroalimentària—, activitats de gestió de residus, dipòsits controlats de residus, i grans explotacions ramaderes —per a la cria de gallines ponedores, porcs d'engreix i truges reproductores.

Com a novetat, aquest any el programa redueix la categoria del risc avaluada per a aquells establiments registrats en el sistema EMAS que en les últimes inspeccions hagin acreditat un compliment satisfactori o adequat de l'autorització ambiental. Aquesta reducció de la categoria de risc comporta una reducció de la periodicitat d'inspecció.

Aquesta Resolució va ser publicada al DOGC de 28 de febrer de 2018 i va entrar en vigor el 20 de març de 2018.